

ACTUALIDAD ECONÓMICA



El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, clausura la Asamblea General de Cephyme. EUROPA PRESS

Salarios y jornada por absentismo: CEOE condiciona el pacto de 2026

Garamendi propone que la Seguridad Social costee el total de las bajas laborales

CRISTINA ALONSO MADRID
A punto de pasar el ecuador del año, la patronal y los sindicatos han sido incapaces ni tan siquiera de sentarse a plantear sus propuestas para el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). El anterior caducó en 2025 y desde entonces los negociadores de los convenios han pactado subidas salariales y demás condiciones laborales a ciegas. Pero si hasta ahora el pacto se atisbaba lejano, ayer la CEOE tensó aún más si cabe la cuerda al decretar que los empresarios van a condicionar cualquier conversación a la reducción del absentismo.

En una jornada titulada *Absentismo x IT: un problema de país*, organizada por la CEOE, una nutrida representación de las organizaciones sectoriales y territoriales más afectadas por la incidencia de las bajas médicas marcó el camino a los sindicatos: si quieren hablar de sueldos o de jornada laboral van a tener que abordar la cuestión del absentismo.

«Salarios y jornada a cambio de absentismo», resumió Manuel Piquer, presidente de la patronal navarra. El propio Antonio Garamendi recordó durante su intervención que ya en 2023, cuando en esa misma sala CEOE y Cephyme condicionaron la firma del AENC a la visibilización del proble-

ma del absentismo por incapacidad temporal, se situó este asunto «en la agenda pública». A juicio del presidente de la patronal, a estas alturas «ya nadie discute que esto es un problema en España».

La escalada de las bajas en los últimos años ha sido de tal magnitud que ya suponen una factura de hasta 33.000 millones de euros, de los que unos 17.000 los pagan las empresas y el resto son asumidos por la Seguridad Social. Y para atajar este coste, Garamendi puso ayer sobre la mesa varias medidas. En resumen: reforzar las plantillas de profesionales sanitarios y de inspectores de los servicios públicos de salud y del Instituto Nacional de la Seguridad Social; potenciar las competencias de las mutuas; adelantar los controles al trabajador de baja por parte de la inspección médica, de modo que se incorporen evaluaciones a los tres, seis y nueve meses, sin tener que esperar al año; y que la inspección médica del INSS asuma el control en los procesos de IT cuya reiteración supere la frecuencia habitual.

Dicho esto, el presidente de la CEOE lanzó una serie de propuestas dirigidas a reducir el coste que asumen las empresas. Siempre, insistió, «mientras que no se tomen

esas medidas para mitigar las consecuencias que el deficiente funcionamiento de los servicios públicos está causando en las empresas». Y directamente reclamó que la Seguridad Social asuma el pago íntegro de los primeros 15 días de los procesos de IT por contingencias comunes (ahora la empresa paga del día 4 al 15), así como que se exonere a las compañías de las cotizaciones en los procesos que duren más de 365 días y en los contratos de sustitución de trabajadores de baja por enfermedad común.

Hace ya meses que el Ministerio de Seguridad Social mantiene abierta una mesa de negociación con la

Los procesos de IT ascienden ya a 33.000 millones de euros...

... que se reparten a partes iguales entre empresas y Seguridad Social

patronal y los sindicatos para abordar la IT, pero las conversaciones están en punto muerto. Consultados por la propuesta de Garamendi, desde el departamento que dirige Elma Saiz se limitan a indicar que «la mejora de la gestión de la incapacidad temporal y la facilitación de la recuperación de la salud de los trabajadores es un asunto capital para el Gobierno y, por ello, desde hace varios meses se está abordando en la mesa de diálogo social, donde se han logrado varios importantes acuerdos en las últimas legislaturas».

Los sindicatos, por su parte, mantienen la línea roja en el propio concepto de «absentismo». En CCOO y UGT están dispuestos a hablar de salud laboral, de prevención de riesgos laborales o de cargas de trabajo, pero se niegan a asumir que España tiene un problema económico por las personas que faltan a su puesto de trabajo por estar enfermas. Además, rechazan por completo medidas como la limitación de los complementos que pagan las empresas para mejorar las prestaciones de IT, que fueron propuestas ayer en la jornada empresarial de la CEOE. UGT, de hecho, cree que estas cláusulas son «una garantía en defensa de la salud» de los trabajadores.

Rechazada en Las Cortes la Cuenta General del Estado

C. S. MADRID

La instancia parlamentaria encargada del Tribunal de Cuentas ha rechazado, por primera vez, un informe del organismo fiscalizador sobre la Cuenta General del Estado. Se trata, según fuentes del PP, del primer freno en el Parlamento al informe que valida cada año la actuación presupuestaria del Gobierno. El documento rechazado es el que validó, con gran fractura interna, la Cuenta General del Estado de 2024 pese a que, entre otras irregularidades, se había detectado el desvío presupuestario de fondos europeos al pago de pensiones.

PP y Vox han hecho valer su mayoría y la ponencia de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas rechaza el informe de la Declaración sobre la Cuenta General del Estado de 2024. No hay precedentes. Según fuentes populares, «la letrada encargada de redactar el informe de la ponencia ponderó los pronunciamientos de los Grupos y señaló que por 20 (PP y VOX) contra 15 (PSOE y Sumar)». Por tanto, «el informe que redactará recogerá que la Ponencia ha rechazado dicha Cuenta General».

No es un pronunciamiento definitivo. Ahora irá a la Comisión el próximo día 23 y se votará en ese organismo, además de las propuestas de resolución presentadas por los Grupos. La mayoría del PP y Vox apunta a que se formalizará ese rechazo.

La vicesecretaría de Regeneración Democrática del PP, Cuca Gamarra, ya anunció el pasado mes una ofensiva parlamentaria contra un informe que, en su opinión, no puede despachar sin más el incumplimiento de la Constitución de no presentar presupuestos desde 2023. Y también el incumplimiento constitucional del artículo 135.3, que regula que el Estado y las CC.AA. «habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer créditos», lo cual el Gobierno ha pasado por alto estos últimos años.

Una consecuencia de la falta de Presupuestos es que se hayan dado de baja partidas ligadas a los fondos europeos para hacer hueco a otras que permitan pagar pensiones y otros gastos, lo cual, según el Tribunal de Cuentas, genera dudas de legalidad.

El PP ha presentado además un escrito, como publicó este diario, en el que reclama la devolución del informe al Tribunal de Cuentas para que lo acompañe en un plazo máximo de tres meses de un estudio sobre las consecuencias en las cuentas públicas de la falta de Presupuestos.

La patronal pide que las empresas hagan controles médicos a trabajadores de baja

El Estatuto de los Trabajadores permite eliminar los complementos si se niegan

Noelia Casado MADRID.

La CEOE está en búsqueda activa de soluciones que puedan frenar el incremento de las bajas por incapacidad temporal, ya que suponen un coste de más de 17.000 millones de euros para las empresas y la mesa con Seguridad Social no concreta medidas de fondo. En este clima, las organizaciones empresariales animan a explorar todas las vías que ofrece la normativa como realizar exámenes médicos a los empleados que estén de baja que certifiquen que están incapacitados para desarrollar su puesto de trabajo.

La patronal celebró este martes una jornada sobre el "absentismo", término con el que se refieren al incremento de los procesos de incapacidad temporal por causas comunes, es decir, accidentes o enfermedades surgidas fuera del trabajo. El presidente de la patronal de la construcción CNC, Pedro Fernández Alén, fue el primero en hacer alusión a este derecho de las compañías, que recoge el Estatuto de los Trabajadores, y por el que los trabajadores pierden el complemento con el que las empresas elevan la prestación durante la baja, y que en muchos casos cubre todo el sueldo.

"Hay que perder los complejos cuando se trata de ganar productividad" situó el líder empresarial, en alusión a que ante el incremento de los procesos por IT, las empresas deberían hacer más uso del artículo 20.4 de la ley laboral. Este punto reconoce que las compañías podrán "verificar el estado de salud del trabajador que sea alegado para jus-

tificar sus faltas de asistencia al trabajo, mediante reconocimiento del personal médico". El mismo artículo que reconoce que "la negativa del trabajador a dichos reconocimientos podrá determinar la suspensión de los derechos económicos que pudieran existir a cargo del empresario por dichas situaciones". Es decir, a los complementos a las bajas que se pactan en los convenios colectivos.

El informe médico solo reporta si están o no capacitados para el puesto, no refleja los motivos

El Tribunal Supremo se pronunció en 2021 sobre este artículo, avallando la capacidad de las compañías de impulsar estos controles médicos, siempre que el resultado que se entregue sea solo el diagnóstico si es apto o no para desarrollar el empleo en ese momento, y no se concreten su dolencia o enfermedad, para respetar el derecho a la intimidad y a la dignidad del trabajador. Es por tanto una fórmula a la que podrían acudir las empresas que tengan sospechas de que el trabajador está incurriendo en un fraude con su baja por incapacidad.

En el mismo sentido se pronunció poco después el presidente de la patronal navarra CEN, Manuel Piquer. "Es un artículo determinante en el control de la baja médica" ase-



El presidente de CEOE, Antonio Garamendi. EP

veró, testificando que a pesar de que no es una figura muy utilizada, ya ha visto cómo las grandes empresas de la comunidad autónoma ya están contratando servicios para que hagan estos exámenes médicos en las contingencias comunes. "En determinados casos, se puede incluso suprimir el pago de los complementos. Utilicemos las medidas legales que tenemos" situó.

La portavoz de la organización empresarial de la Comunidad de Madrid CEIM, Laly Escudero, también mencionó que es fundamental que las empresas puedan conocer la causa de la baja. En la mesa de negociación con el Gobierno se ha planteado que los médicos tengan que concretar para qué tareas queda impedido el trabajador, para que

los trabajadores que tengan varios empleos no queden impedidos para todos ellos, si desarrollan funciones diferentes.

En relación con esta materia, la vicepresidenta de CEIM también hizo alusión a que están tratando de reducir estos complementos en la negociación colectiva. Es habitual que los sectores fueran generosos en acuerdos cerrados hace décadas, por lo que las empresas abonan el 100% del sueldo desde el primer día hasta el decimoquinto. También se pronunció en este sentido el presidente de Confemetal, José Miguel Guerrero, quien mencionó diferentes ejemplos de convenios provinciales en los que se ha recortado el complemento en los primeros días de baja o ante reincidencias.

Garamendi exige que Seguridad Social pague los primeros 15 días

N. C. MADRID.

CEOE acogió ayer una jornada centrada en los problemas que enfrentan las empresas por el aumento de las bajas laborales. La patronal ha convocado en su sede de Madrid a los principales representantes de las autonomías más afectadas por esta coyuntura, de los principales sectores económicos y de las patronales ATA y Cepyme en una jornada en la que el presidente, Antonio Garamendi, ha demandado que Seguridad Social asuma el coste de los primeros 15 días de baja mientras siga sin plantear soluciones convincentes a las organizaciones empresariales.

Actualmente, las compañías privadas asumen la prestación desde el 4 al 15 día de incapacidad temporal, lo que representa un coste anual que ya supera los 17.000 millones de euros (si se suma el dinero destinado a complementar la prestación), según los últimos datos aportados por la patronal de las mutuas AMAT. El líder empresarial ha destacado que los procesos de corta duración son los que presentan menor incidencia y que por tanto, en todos ellos el coste recaerá íntegramente en la empresa. Por tanto, CEOE demanda que Seguridad Social asuma el pago tanto de la prestación como de las cotizaciones, que ahora asumen las compañías.

El problema está concentrado en las bajas por contingencias comunes, estas son las que cubren enfermedades o accidentes generados fuera del trabajo y de las horas destinadas a este, ámbito en el que los procesos por salud mental han registrado un gran incremento desde la pandemia, en especial en los profesionales más jóvenes. La normativa establece que durante los primeros tres días no se percibe prestación en estas bajas.

González Soler renueva su mandato en CEMAES

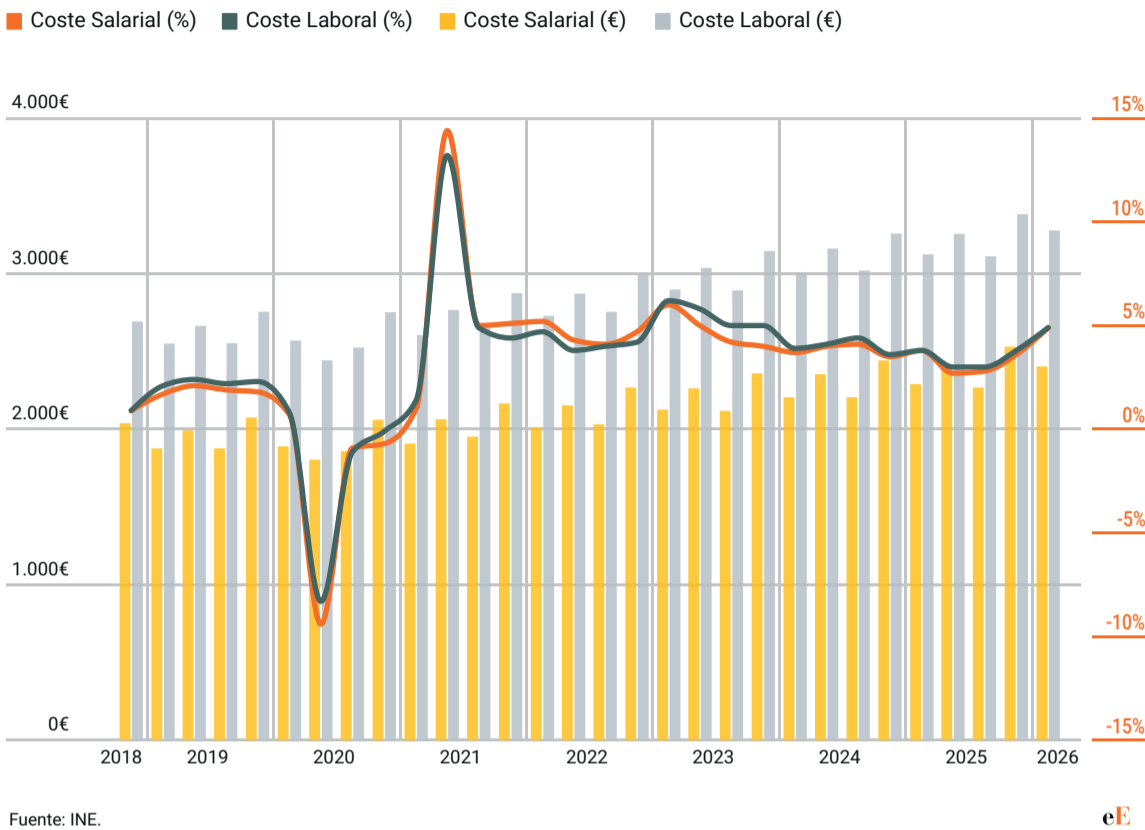
Clemente González Soler, presidente de Alibérico y vicepresidente de Editorial Ecoprensa, fue reelegido presidente de la representación española del Consejo Empresarial Marruecos-España (CEMAES). La reelección de González Soler, que ocupa este cargo desde 2022, fue aprobada por unanimidad de la asamblea liderada por Mehdi Tazi, presidente de la Confederación General de Empresas de Marruecos. EE



Economía

Evolución del coste laboral y salarial desde 2018

Variación en porcentaje y en euros



Fuente: INE.

eE

El coste laboral alcanza los 3.278 euros, su mayor cota en 26 años

El salario medio avanza un 4,9% en el primer trimestre y se sitúa en 2.403 euros, y arroja también su mayor registro desde el año 2000

María Medinilla MADRID.

El coste del empleo avanzó un 4,9% en el primer trimestre del año, el mayor incremento interanual desde el cuarto trimestre de 2023 que lo eleva hasta los 3.278,01 euros más, el nivel más elevado en un arranque de año desde el inicio de la serie en el año 2000. La tendencia, que supera ya los cinco años de subidas consecutivas, se replica en su mayor componente, el coste salarial (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie), que aumentó al mismo ritmo hasta los 2.403,80 euros brutos por trabajador y mes, también marca la cota más alta para ese periodo de los últimos 26 años.

El avance tanto del coste laboral como salarial supera en más de un punto en ambos casos (1,1 y 1,3 respectivamente) el anotado en el trimestre anterior y mantienen cierto vigor ya mostrado a cierre de 2025 tras el periodo de contención de los últimos trimestres en un cambio de guion tras el boom que se desató tras la pandemia. Ambas alzas -también impulsadas en parte por el avance del salario mínimo interprofesional- superan la inflación media del primer trimestre, que se situó en el 2,6%, aunque habrá que ver la evolución del resto del año (las últimas estimaciones prevén que cierre por encima del

3,5%) para decretar si hay pérdida de poder adquisitivo. Además, está también por ver si patronal y sindicatos llegan a un acuerdo para renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y si el Ejecutivo.

Por secciones de actividad, el coste laboral registró sus mayores incrementos interanuales en el suministro de energía (+15,1%, hasta los 9.043,7 euros por trabajador y mes) y en educación (+10,8%, hasta los 3.130,99 euros por trabaja-

De enero a marzo hubo 159.785 vacantes, máximo desde el inicio de la serie (2013)

dor y mes). El único descenso interanual del coste laboral los experimentó el suministro de agua (-0,9%, hasta los 3.499,52 euros por trabajador y mes).

Los ascensos interanuales menos pronunciados del coste laboral se dieron en la hostelería (+1,4%, hasta los 1.883 euros mensuales, el menor coste de todas las secciones de actividad) y las actividades artísticas (+2,3%, hasta los 2.127,8 euros mensuales).

Los salarios mostraron subidas interanuales en el primer trimestre en todas las comunidades autónomas pero sobresalieron sobre las demás las de País Vasco (+8,7%), Cantabria (+8,4%) y Madrid y Castilla y León, ambas con un ascenso del 5,8%.

La Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) que publica este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) indica que los otros costes (costes no salariales) aumentaron un 4,8%, 874,21 euros por trabajador y mes. Las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, principal componente, crecieron un 4,5%. En esta ocasión el repunte es menor que el de los salarios, al contrario de lo que ocurrió en el último trimestre de 2025.

La tendencia se plasma en un dato: los costes laborales llevan 21 trimestres consecutivos en alza, con más de cinco años consecutivos de incrementos ininterrumpidos, que redefinen una estructura de gastos de las empresas españolas en un momento en el que el mercado laboral sigue sin poder cubrir un número de puestos de trabajo crecientes.

Junto a los costes laborales, el INE publicó datos de vacantes de empleo en el primer trimestre, entre enero y marzo se contaron 159.784 puestos vacantes en España, 6.900 más que un año antes.

Díaz cesa al director del SEPE tras años de roces y lo sustituye por un subdirector

El Consejo de Ministros aprueba el cese de Gerardo Gutiérrez, que llevaba 8 años en el cargo

Noelia Casado MADRID.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el cese del director general del SEPE, el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo que se encarga de gestionar las prestaciones por desempleo y diseñar las políticas activas de empleo junto a los órganos de las comunidades autónomas. En una carta dirigida a los miembros del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo a la que ha tenido acceso *elEconomista.es*, Gerardo Gutiérrez Ardoy, confirmaba que el Gobierno haría efectivo hoy su cese y nombraría a un miembro de su equipo para tomar el relevo, tras ocho años en este cargo.

El responsable del Servicio Público de Empleo Estatal llegó a la dirección del SEPE en julio de 2018, tras la moción de censura por la que Pedro Sánchez se hizo presidente del Gobierno por primera vez. El hasta hoy responsable del organismo forma parte del PSOE de Castilla-La Mancha y es miembro de las comisiones ejecutivas municipal y provincial de Albacete de esta formación política, por lo que a lo largo de los últimos años había manifestado posiciones diferentes a las del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey -de Sumar-, sobre el rumbo a adoptar en las políticas de empleo, entre ellas, la reforma del SEPE para construir la Agencia Española de Empleo, parada desde 2023.

A comienzos de mes se dio a conocer la noticia de que Yolanda Díaz había decidido sustituirlo en el cargo, algo que en el ministerio contextualizaron como una deci-

sión normal de la gestión dentro de la gestión de este departamento y que respondía a críticas internas. En la misiva enviada esta tarde, el hasta ahora director del SEPE celebra algunos de los hitos logrados en los últimos años, como las estrategias españolas de apoyo activo al empleo o la Ley de Empleo de 2023, en la que se incluía la transformación del SEPE en una agencia independiente que aún sigue sin materializarse.

En su lugar, el Consejo de Ministros ha situado a un miembro de su equipo cercano. De acuerdo con las fuentes consultadas será el actual subdirector general de Estadística e Información, Ricardo Cuesta el que asumirá este cargo, quien sucedió hace unos meses a Federico Muñoz, quien pasó a trabajar para el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Cuesta ha ejercido cuatro años como di-

Eran públicas sus diferencias con el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey

rector provincial del SEPE de Madrid, después de desarrollar una amplia trayectoria en el ámbito del empleo. En su escrito de despedida, Gutiérrez señala que su relevo "permitirá continuar con lo que mejor funciona y seguir avanzado en la mejora continua de los servicios públicos de empleo".

La referencia de la reunión de los ministros publicada a última hora de la tarde confirma este paso. Entre los acuerdos del Ministerio de Trabajo figura un real decreto de personal por el que se nombra director general del SEPE a Ricardo Cuesta García, junto al detalle de su curriculum.



La ministra de Trabajo y el exdirector del SEPE. EE

ECONOMÍA / POLÍTICA

CONFLICTO EN ORIENTE PRÓXIMO

El crudo pierde los 80 dólares por barril, pero le costará caer por debajo de los 70

EL PETRÓLEO CAE UN 18% EN UNA SEMANA/ Las navieras desconfían de la reapertura del estrecho de Ormuz y temen que el acuerdo de paz llegue a descarrilar ante la división provocada por el programa nuclear y la intención iraní de imponer peajes.

Pablo Cerezal, Madrid

El precio del petróleo se ha hundido con fuerza en la última semana, como resultado del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Próximo y reabrir el estrecho de Ormuz, pasando del entorno de los 95 dólares en los que se movía hace apenas una semana a caer por debajo de los 80 dólares ayer. Sin embargo, la empresas y los analistas apuntan que la situación en el mercado energético está lejos de normalizarse por completo y que, después de las bajadas iniciales, la cotización del crudo tardará en recuperar las cifras previas al inicio de la ofensiva, cuando se situaba por debajo de la cota de los 70 dólares. ¿La razón? Las infraestructuras destruidas auguran que la producción en los países de la zona tardará un tiempo en recuperarse por completo, mientras que las navieras desconfían de la seguridad para el tránsito por Ormuz, por lo que el número de buques sigue muy por debajo de lo habitual.

Jotaro Tamura, CEO de Mitsui OSK Lines, una de las principales navieras a nivel mundial, señaló ayer a *Financial Times* que las empresas se mostrarán reticentes a volver a utilizar la vía del estrecho de Ormuz hasta que tengan la certeza de un acuerdo "material". Es decir, que las dudas podrían mantenerse no solo hasta la firma del acuerdo en Suiza, muy probablemente este viernes, sino también hasta que se cierren los flecos pendientes, como es el caso del programa nuclear iraní o la imposición o no de peajes por cruzar Ormuz. Hay que tener en cuenta que hay varios elementos que pueden hacer descarrilar el memorando de entendimiento acordado entre ambos países, como son el programa nuclear iraní, el pago de peajes a la República Islámica o la contención de Israel. Tres cuestiones áridas que pueden hacer descarrilar el acuerdo de paz, dejando atrapados a los buques que crucen el Estrecho en los próximos días.

EL CRUDO APUNTA HACIA LOS NIVELES PREVIOS A LA GUERRA

Precio del Brent. En dólares por barril.



Expansión

Fuente: Bloomberg

Una coalición internacional para desminar Ormuz

La reunión del G7 que se celebra esta semana en Evian (Francia) está sirviendo para orquestar una coalición internacional para desminar el estrecho de Ormuz y mantener la seguridad del tránsito por el cordón umbilical mundial de la energía. Fuentes diplomáticas en la cumbre explicaron a *EFE* que esa coalición liderada por Francia y el Reino Unido ha hecho una propuesta para lanzar una misión para el desminado del estrecho de

Ormuz. EEUU habría solicitado esa ayuda porque carece de los medios de desminado necesarios y los miembros de esa coalición se han empezado ya a movilizar, en particular con la salida de barcos franceses especializados desde el puerto de Tolón, en el Mediterráneo, que tardarán varios días en llegar. En cualquier caso, antes de que se pueda materializar esa posible misión, que se haría sin la participación de los contendientes, hará falta

el visto bueno de los dos países ribereños del Estrecho, Irán y Omán. Las fuentes se mostraron convencidas de que Teherán tiene interés propio para que sus barcos puedan circular sin peligros por ese paso por el que antes del conflicto transitaba en torno al 20% del petróleo y del gas natural licuado que se consume en el mundo, así como alrededor de un tercio de los fertilizantes. Irán carece de las capacidades para llevar a cabo un desminado efectivo,

pero probablemente conoce dónde puede haber minas. Ese trabajo tiene que hacerse con barcos especialmente equipados, que necesitan un sónar pero también submarinistas para labores de prospección. Además de esa validación de Irán, habrá que esperar a que se formalice el acuerdo para poner fin a la guerra este viernes. Además, esta coalición se encargaría también de garantizar la seguridad frente a nuevos ataques.

En primer lugar, uno de los grandes puntos abiertos para los próximos 60 días es el programa nuclear de Irán, al que Washington reclama poner fin y que Teherán quiere mantener. El problema es que este punto es el único en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puede obtener una mejora respecto a la situación de febrero, algo que resulta necesario para poder vender una cierta victoria a los votantes estadounidenses en noviembre, por lo que es posi-

ble que Trump trate de apretar las tuercas a Irán en este aspecto. En segundo lugar, queda pendiente la imposición de peajes por el tránsito por Ormuz. Si bien Irán ha reivindicado el pago de tasas a los barcos que crucen el Estrecho en concepto de garantía de seguridad, Estados Unidos reclama que el acuerdo de paz implica que Teherán deje el paso abierto de forma libre y gratuita a todos los interesados. Finalmente, Israel está muy des-

contento con este acuerdo, que ha provocado una grave pérdida de apoyo a su primer ministro, Benjamin Netanyahu, quien podría llegar a intentar sabotear el acuerdo.

A ello hay que sumar que la producción de petróleo en los países del golfo Pérsico se ha resentido notablemente durante la guerra y tardará en recuperarse. De acuerdo con las cifras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la producción de crudo en Oriente Próximo se ha reducido en más

de diez millones de barriles de crudo al día, una cifra entre la que hay que considerar tanto interrupciones voluntarias del suministro por la falta de transporte como disrupciones provocadas por la destrucción de infraestructuras. Y, mientras que las primeras podrían subsanarse en unos meses, en el caso de las segundas podría costar hasta dos años reparar los daños. De hecho, el gran volumen de crudo que ha fluido al mercado en los últimos dos días se debe

Reparar todas las infraestructuras dañadas por la guerra podría llevar hasta dos años

a que buena parte de este petróleo estaba atrapado en los almacenes en los puertos de los países del Golfo, e incluso en barcos en la zona interior de Ormuz. Sin embargo, una vez que se ha dado salida a los primeros buques, será más complicado que las siguientes tandas mantengan el ritmo. Máxime, si se tiene en cuenta que apenas había buques petroleros en las últimas semanas en dirección a Ormuz.

Perspectivas

De hecho, los analistas de instituciones como JPMorgan, Goldman Sachs, HSBC o Commodity Context apuntan que, a pesar del optimismo desatado por las fuertes bajadas de la última semana, con un descenso acumulado del 18%, el precio del petróleo se situará en torno a los 80 o 90 dólares durante varios meses antes de volver a los niveles previos a la guerra, en torno a los 65-70 dólares por barril. La agencia de rating Standard & Poor's señaló ayer en un informe que "incluso tras un acuerdo preliminar, nuestro escenario base sigue contemplando una recuperación gradual del transporte marítimo y los flujos de energía a través del estrecho de Ormuz", por lo que la producción no se recuperará por completo hasta dentro de unos meses. Además, "creemos que existe la posibilidad de que persistan los desafíos operativos y la incertidumbre hasta que se finalice un acuerdo integral" dentro de dos meses. De hecho, el texto advierte de que "el foco está cambiando de si se reabre el Estrecho a cómo se reabre", añadiendo que, aunque "los riesgos están en retroceso", todavía persistirá durante un tiempo una cierta "prima de riesgo geopolítica en los precios de las commodities" energéticas.

MUNDO

El G-7 arrastra a Donald Trump hacia Ucrania

- El presidente de EEUU afirma en Evian que «Rusia debería llegar a un acuerdo»
- Los líderes europeos piden al mandatario americano auspiciar unas negociaciones

Tras casi cuatro meses volcado en el conflicto con Irán, Donald Trump admitió que ha llegado el momento de «centrarnos en eso», en referencia directa a Ucrania, con Volodímir Zelenski sentado en la misma mesa redonda orquestada por Emmanuel Macron como anfitrión del G-7 en Evian. «Rusia debería llegar a un acuerdo», fue la conclusión del presidente estadounidense, que reconoció cómo la «antipatía» entre los dos líderes sigue siendo el principal obstáculo para el fin de la guerra.

Los líderes europeos pidieron a Trump que se involucre personal-



CARLOS FRESNEDA
EVIAN

mente y se ofrezca a auspiciar unas negociaciones a cuatro bandas, con EEUU y la UE como partes implicadas, dada su relación con Putin y con Zelenski. La charla cara a cara entre Trump y el presidente ucraniano, en un encuentro no previsto en la agenda al término de la reunión multilateral, abrió algunas esperanzas.

Zelenski aseguró que EEUU está «dispuesto a apoyar nuestras posiciones», convencido de que «Rusia ha perdido la iniciativa en muchos terrenos». Fue el mensaje con el que el presidente ucraniano se presentó en Evian y que le convirtió de algu-

na manera en el vencedor moral de la cumbre del G-7.

«¿Tienes algo que hacer más tarde?», fue la pregunta con la que Macron extendió la invitación a Zelenski para quedarse hasta el final de la cumbre y posibilitar nuevos e imprevistos encuentros con Trump. Pese a los buenos augurios, varios medios franceses captaron al presidente francés reconociendo que tuvo un primer intercambio acalorado con Trump sobre Ucrania a su llegada el lunes.

La ciudad balneario a orillas del lago Lemán está teniendo, sin embargo, un efecto relajante sobre Trump, abierto a breves intercambios con la prensa sobre Ucrania e Irán y dispuesto a sonreír ante los fotógrafos con la camiseta de la selección ale-

mana que le entregó personalmente Friedrich Merz como regalo por su 80 cumpleaños.

Fue el momento más distendido de la cumbre. El canciller alemán se desmarcó del resto de líderes europeos para plantarse ante Trump, que en un primer momento se puso en guardia. Cuando Merz dio la vuelta a la camiseta y mostró «TRUMP» estampado junto al número 47, el presidente bajó la guardia y selló aparentemente la paz con el canciller, que mes y medio antes le había metido un gol diplomático al afirmar que Irán había «humillado» a Estados Unidos.

Todo en el G-7, incluida la cena final en Versalles el miércoles para celebrar los 250 años de la Declaración de Independencia estadounidense, parece diseñado para complacer al anfitrión americano y evitar un plantón comparable al de la última cumbre en Canadá.

Aunque Trump se hizo esperar mientras los líderes europeos mataban el tiempo, la mesa redonda del martes sobre seguridad y paz en Ucrania avanzó según lo previsto por la presidencia francesa, con un protagonismo especial reservado a Zelenski y la incógnita sin resolver de quién sería el mediador europeo si se da un nuevo impulso a las negociaciones de paz.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estuvo especialmente efusiva con Zelenski, un día después del inicio de las conversaciones para la integración de Ucrania y Moldavia en la UE. «Kiev ha cumplido, ahora le toca cumplir a la UE», declaró. «Ucrania no solo ha mantenido el frente, sino que ha ganado incluso parcialmente territorio. Por otra parte, Rusia está soportando la tensión y la presión: nuestras sanciones están teniendo un profundo impacto».

«Nuestras prioridades son claras: aumentar el número de misiles de nuestra defensa, poner en marcha un programa de ayuda para el invierno e intensificar la presión sobre Rusia», escribió Zelenski en Telegram, tras mantener varios encuentros bilaterales por la tarde y anunciar un acuerdo de coproducción de drones con el primer ministro canadiense Mark Carney.

Zelenski confirmó haber lanzado a Putin el órdago de un encuentro en el marco del G-7, «pero los rusos no quisieron». El presidente ucraniano expresó su esperanza en sellar un acuerdo de paz antes de fin de año para evitar que sus compatriotas soporten «otro invierno terrible».



Foto de familia tras las reuniones del G-7, con Macron y Trump en el primer plano, ayer, en Evian. AFP



El canciller alemán Merz regala una camiseta de la selección alemana a Donald Trump, ayer, en Evian. AP



EMPRESAS

Indra ultima acuerdos con Rheinmetall y MAN para blindados por 3.000 millones

ALIANZA INDUSTRIAL/ Tras comprar una fábrica a Duro Felguera, Indra trabaja en la compra de dos nuevos centros para ampliar sus capacidades productivas, con una inversión conjunta de 130 millones.

Javier Roibás. París

Indra ultima acuerdos con los gigantes alemanes Rheinmetall y MAN para utilizar sus plataformas en dos de los contratos de modernización militar que le adjudicó el Gobierno español el año pasado.

Se trata, por un lado, del contrato de artillería sobre ruedas (adjudicado a una UTE de Indra con Escribano Mechanical & Engineering, EM&E) y, por el otro, de la licitación para el vehículo lanzapuentes de ruedas. En conjunto, están valorados en unos 3.000 millones de euros.

“Estamos en una fase de conversaciones muy avanzadas”, apunta el director de programas de Indra y responsable de Indra Land Vehicles, Frank Torres, en el marco de Eurosatory, la feria internacional de Defensa que se celebra estos días en París y en la que participa una nutrida representación de empresas españolas del sector.

Al igual que Indra llegó a un acuerdo con la coreana Hanwha para la plataforma del K9 en el programa de artillería de cadenas –valorado en unos 4.500 millones de euros– y con Iveco Defence Vehicles para los blindados anfibios para la Armada –un contrato de unos 374 millones–, la idea de la compañía es utilizar los camiones de Rheinmetall y de MAN como ba-

CAZA EUROPEO

Pese al fracaso del programas FCAS, Indra considera que hay “buenas posibilidades” de poder seguir adelante, ya sea con Alemania o con “otras soluciones” para cubrir las necesidades que tiene el Ejército en este ámbito.

También tiene una alianza con MAN y Rheinmetall para 1.000 millones en camiones militares

se, tanto en el sistema de artillería de ruedas como en el programa del lanzapuentes. Rheinmetall y MAN tienen una *joint venture* –Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV)– de la que Rheinmetall posee una participación mayoritaria del 51% y MAN Truck & Bus el 49% restante.

Tanto a los programas de artillería como al del vehículo lanzapuentes también aspiraba Santa Bárbara Sistemas, propiedad de la estadouni-



Vehículo blindado Howitzer de Rheinmetall.

dense General Dynamics. De hecho, Santa Bárbara libra una batalla legal y administrativa contra el Gobierno a cuenta de la concesión a Indra y a EM&E de los contratos de artillería de ruedas y de cadenas por 7.240 millones.

Las conversaciones para que la plataforma de Rheinmetall y MAN sea la elegida para estos contratos están tan avanzadas que el propio Torres reconoce que se espera que “antes de que acabe el año” ya se tenga el primer

prototipo del vehículo lanzapuentes sobre camión.

La colaboración de Indra con Rheinmetall MAN Military Vehicles también se ha traducido hasta el momento en una oferta conjunta para hacerse con el programa de camiones militares tácticos para el Ejército español.

Se trata de un programa valorado en unos 1.000 millones de euros y por el que compiten empresas como la italiana Iveco Defence Vehicles (propiedad ahora de Leonardo),

Scania, Volvo o Daimler Trucks (Mercedes-Benz).

Inversión de 130 millones

Torres también explica que la compañía está invirtiendo en la actualidad para ampliar sus capacidades productivas con el fin de cumplir con los plazos de entrega requeridos por el Ministerio de Defensa en los distintos programas de modernización militar para vehículos terrestres.

El directivo ha cifrado en 130 millones la inversión en

Renault y Thales fabricarán drones kamikaze

Renault y Thales refuerzan su alianza estratégica en Defensa. Ambas empresas se lanzarán a la fabricación de munición teleoperada, conocida también como drones suicida, a gran escala en Francia. La intención es iniciar desde 2027 la producción de estos drones, con una capacidad de 1.000 unidades al mes desde el primer año. Esta alianza surge después de los contactos entre el Gobierno francés con Renault para impulsar las capacidades industriales del país. El dron Toutatis se utiliza como munición teleoperada de corto alcance y puede ser controlado por un soldado de a pie y desplegado en varias plataformas, como vehículos de combate, aeronaves y en buques. Resiste interferencia electromagnética y tiene carga militar intercambiable.

tres nuevas plantas y en la maquinaria asociada, entre otras cuestiones.

Una de ellas es la que compró el año pasado a Duro Felguera por 3,6 millones de euros, conocida como El Tellerón y ubicada en Gijón, mientras que de las otras dos instalaciones no ha detallado su ubicación. No obstante, se ha hablado en las últimas semanas del interés de Indra en comprar otra fábrica a Duro

> Pasa a pág. siguiente

MECALUX
Software Solutions

SOFTWARE DE GESTIÓN DE ALMACENES

902 31 32 42

mecalux.es/software

El Parlamento Europeo despeja el último obstáculo para aprobar el acuerdo arancelario con EE UU

“Es un paso relevante para demostrar la importancia de esta relación comercial”, defiende el comisario de Comercio

MANUEL V. GÓMEZ
Bruselas

El Parlamento Europeo aprobó ayer el acuerdo arancelario con Estados Unidos alcanzado hace casi un año por 440 votos a favor, 151 en contra y 50 abstenciones. Se despejaba así el último obstáculo que quedaba para que entren en vigor los compromisos europeos del pacto. Todavía falta que el Consejo de la UE, es decir, los Estados miembros, dé su beneplácito, pero se da por descontado, ya que en esta institución nunca hubo dudas sobre la necesidad de ratificar el pacto por el que la mayoría de exportaciones europeas al otro lado del Atlántico pagan un arancel del 15% mientras que la Unión elimina cualquier tarifa de entrada a los productos industriales estadounidenses y a productos agrícolas considerados “no sensibles”, como la soja o los frutos secos.

Los 11 meses que han pasado desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, escenificaron el acuerdo en uno de los clubes privados de golf que este último posee en Escocia han llegado a hacer perder la paciencia al dirigente estadounidense.

Trump llegó a amenazar con imponer aranceles adicionales del 25% a los vehículos europeos el 1 de mayo por esa demora. Finalmente la amenaza se aplazó y las negociaciones entre los dos legisladores de la UE para ratificar el pacto comercial se aceleraron.

“Este paso es muy relevante para demostrar la importancia que damos a esta relación comercial, la mayor del mundo”, defiende el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, en el debate previo a la votación, celebrado el lunes. “De hecho, ha aumentado. Estamos hablando de millones de puestos de trabajo y empresas que dependen de que colaboramos con nuestros socios estadounidenses de la mejor manera posible”, añadió.

“Hubo retrasos que no tenían que ver con nosotros, también tenían que ver con Estados Unidos. Lo que ocurrió con Groenlandia, cuando se amenazó con aranceles. Y el Supremo estadounidense rechazó los aranceles [impuestos



Maros Sefcovic, el lunes en Estrasburgo. OLIVIER MATTHYS (EFE)

por la Administración de Donald Trump). Había mucha incertidumbre”, justificó durante el debate parlamentario Bernd Lange, presidente de la comisión de Comercio en la Eurocámara. “Hemos clarificado los puntos débiles que tenía este acuerdo”, añadió el veterano eurodiputado socialdemócrata alemán.

El paso dado ayer no es más que la ratificación de los textos legales que desarrollan parte del acuerdo arancelario, que también tenía aspectos que no precisaban de un desarrollo legal, como los compromisos de inversión o los de compra de productos estadounidenses. Los elementos que sí lo precisaban son los que atañen a la rebaja a cero de aranceles para importaciones estadounidenses (productos industriales y algunos agrícolas).

Además, durante su tramitación legislativa —y a la vista de los vaivenes y amenazas constantes de la Casa Blanca— se ha introducido una fecha límite para que se solucione una de las asignaturas

El pacto impone tarifas del 15% para los productos de la Unión

Washington no pagará por los bienes industriales y varias mercancías agrícolas

pendientes del acuerdo alcanzado en Turnberry (Escocia): los aranceles del 50% a las exportaciones europeas de acero y aluminio.

Este punto concreto del contencioso comercial se abrió antes incluso que la batalla por los mal llamados por Trump aranceles recíprocos. El pacto de Turnberry solucionó esta última pelea y la de los vehículos, pero no la del acero y el aluminio. Los productos europeos todavía tienen que pagar una tarifa aduanera para entrar en Estados Unidos del 50%, pese a que en el acuerdo arancelario se esbozó una línea de trabajo “basada en contingentes arancelarios”, es decir, cuotas de productos exentos de tasas o con una tasa menor hasta cierta cantidad.

También se apuntaba a colaborar “para proteger a sus respectivos mercados del exceso de capacidad”, una referencia muy clara a China. Pero muchos meses después, la situación sigue igual. Por eso, el Consejo y el Parlamento introdujeron una modificación en la propuesta de la Comisión fijando el 31 de diciembre de 2026 como la fecha en que debe solucionarse el problema. Si llega ese momento y la situación actual se mantiene, la Comisión podría paralizar la aplicación del acuerdo.

Los legisladores europeos también han introducido una fecha de caducidad para la exención arancelaria a las importaciones industriales y agroalimentarias: el 31 de diciembre de 2029, es decir, cuando este segundo mandato de Trump ya haya acabado.

El Gobierno aporta 719 millones a una gigafactoría de IA en Tarragona

Telefónica, ACS y el Santander serán los principales accionistas privados, con el 47% del capital

MARC ROVIRA
Barcelona

El Consejo de Ministros aprobó ayer destinar una inversión de 719 millones de euros procedentes de fondos europeos para reforzar la candidatura de Móra la Nova (Tarragona) como sede de una gigafactoría europea de inteligencia artificial (IA). “La inversión es una apuesta del Gobierno por la soberanía tecnológica y la reindustrialización”, afirmó el portavoz del Gobierno, Elma Saiz. El trámite va en paralelo al impulso que presta al proyecto el Govern de la Generalitat, que ayer dio luz verde a la constitución de la sociedad mercantil y las autorizaciones para poner los terrenos a disposición de la gigafactoría en una comarca, la Ribera d’Ebre, golpeada por la despoblación y donde se teme que, una vez cierre la central nuclear de Ascó, surjan problemas para generar empleo. “Es un paso adelante decisivo”, defiende el Gobierno catalán.

Banco Santander, ACS y Telefónica, los tres inversores privados principales del proyecto, controlarán de forma conjunta el 47% del capital con una participación individual del 15,67% cada uno, según adelantó *Expansión* y confirma el Govern.

Con la entrada de Multiverse Computing, que contará con un 4%, el bloque privado alcanzará el 51% del capital y asumirá el control de la sociedad.

Por su parte, el Gobierno ostentará una participación del 47,99% a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), conocida como la *SEPI digital*, mientras que, al menos en la fase inicial, la Generalitat contará con un 1% a través del Inca30 (Instituto Catalán del Suelo).

La consejera portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, aseguró frente a las críticas ecologistas surgidas en el sur de Cataluña, que el proyecto es sostenible porque dispone de energía

suficiente para abastecerlo y porque el Govern trabaja para tener independencia de recursos hídricos al margen de la pluviometría. “A menudo, oímos que los proyectos tienen tendencia a ir al área metropolitana”, explicó, aludiendo a la vocación descentralizadora de una inversión que ronda los 2.000 millones de euros y que podría llegar hasta los 5.000 millones.

El equipo de profesionales para desarrollar el proyecto de gigafactoría se está configurando, pero ya está decidido que lo lidere Francesc Fajula como director general. Fajula fue hasta esta primavera máximo responsable ejecutivo de la Mobile World Capital, una iniciativa vinculada al congreso mundial de telefonía que se celebra en Barcelona. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, avanzó a principios de junio que la inversión del Ejecutivo para la gigafactoría de IA se situará entre los 600 y 800 millones.



Elma Saiz, ayer en Madrid. C. LUJÁN (EP)

La constitución de la sociedad mercantil, con domicilio social en Móra la Nova, es un requisito clave para concurrir a la próxima convocatoria de gigafactorías de IA que la Comisión Europea prevé lanzar en breve, en el marco de una candidatura española que contempla movilizar cerca de 4.000 millones de euros de inversión público-privada. A la ubicación de Móra la Nova, se sumó en enero el municipio madrileño de San Fernando de Henares, que en calidad de subse de forma parte del proyecto que el Ejecutivo presentará al concurso que la Comisión Europea prevé lanzar para elegir cuatro instalaciones de tecnología puntera en distintos Estados de la UE.